

LOS MINISTERIOS CIVILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD INTERIOR

Bertha García Gallegos*

En el Estado moderno, el desarrollo de los "ministerios" como ejes de la administración pública permitió organizar las funciones del Ejecutivo en diversos campos de las políticas públicas bajo la responsabilidad de procurar el bien común y garantizar la protección de la persona y sus derechos. El Jefe de Estado ejerce tanto la función política orientada a la unidad nacional, como la jefatura jerárquica de la administración pública. Casi todas las Constituciones incluyen en la función Ejecutiva el acompañamiento de los ministerios.

Buena parte de la crisis de la administración pública en el Ecuador tiene que ver con la desestructuración de los ministerios y su casi reemplazo por las "unidades ejecutoras" adscritas a la Presidencia. Este proceso se inició durante las dictaduras militares y ha llevado al desmantelamiento de estos organismos, en términos políticos y presupuestarios. Salvo en pocos y honrosos casos, una burocracia estéril, poco profesionalizada, ocupa los espacios ministeriales que debían ser de gestión y promoción eficiente de los bienes públicos.

Existen lugares en donde históricamente no se han ejercido las funciones de dirección política y administrativa del poder Ejecutivo. Frecuentemente y por diversas razones, poderes estamentales se han acostumbrado a auto procurarse su propio ordenamiento, estableciendo amplias áreas de discrecionalidad y autonomía sobre sus esferas de acción. En el Ecuador, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han constituido virtualmente mundos aparte del sistema

CONTENIDO

EDITORIAL

LOS MINISTERIOS CIVILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD INTERIOR

PÁG. 1

MILITARES EMPRESARIOS: UN FENÓMENO DE LAS SOCIEDADES EN VÍAS DE DESARROLLO

Kristina Mani.

PÁG. 2

¿ES POSIBLE DESARROLLAR LA INTELIGENCIA CRIMINAL EN AMÉRICA LATINA?

José Manuel Ugarte.

PÁG. 4

LAS RELACIONES POLICÍA - COMUNIDAD EN UN CONTEXTO DEMOCRÁTICO

Juan A. Rivadeneira F.

PÁG. 5

MINISTERIO DE GOBIERNO Y NACIONES UNIDAS REALIZAN SEMINARIO DE ALTA GERENCIA POLICIAL

PÁG. 6

RESDAL ORGANIZÓ EVENTO EN BOGOTÁ SOBRE "PARLAMENTO Y DEFENSA EN LA REGIÓN ANDINA"

PÁG. 8

CRONOLOGÍA DEFENSA, SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA

Julio - Agosto 2007

PÁG. 8

político administrativo. Las primeras porque han blindado sus relaciones con el Ejecutivo cuidando celosamente su autonomía. La segunda, Policía Nacional, porque ha sido sistemáticamente abandonada a su propia suerte, a pesar de que, hoy por el momento, el problema de la seguridad pública y ciudadana es quizá la primera percepción de amenaza por parte de los ciudadanos y señala su mayor prioridad hacia el Estado.

Pensamos que es hora de construir una vinculación más orgánica, entre la administración política y la "conducción profesional interna", que se esfuerce por posicionar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, cada una dentro de su específica misión diferenciada, en el Estado de Derecho. La visión estratégica de la Defensa, y la de la Seguridad Pública, respectivamente, deben ser proporcionadas por el Gobierno como representante de la voluntad ciudadana y transmitidas hasta los entes operativos institucionales, que tienen la responsabilidad de organizar el mando y la disciplina, al interior de entidades cuyos integrantes están sujetos a la obediencia y no deliberancia.

En los actuales momentos, la presencia de un ministro "civil" frente a la Defensa y la puesta en práctica de importante elementos de la nueva "Ley Orgánica de Defensa Nacional" ya es un comienzo positivo, pero que debe ir más

allá a ritmo acelerado. En cuanto a la Policía Nacional, la importancia vital del tema de la seguridad pública y el tamaño y complejidad de la institución policial debe merecer realmente y con urgencia, la instrumentación de un verdadero Ministerio de Seguridad Interior.

Las relaciones entre Ministerio de la Defensa, o del Ministerio de Seguridad Interior con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en el un caso, o con la Comandancia General de Policía, en el otro, deben representar la relación entre la dirección política y la eficacia profesional operativa (el Mando). Para ello, se debe maximizar la importancia profesional y técnica del mando, minimizando sus eventuales desbordes políticos, a fin de que pueda proyectar su liderazgo profesional y moral hacia el interior del cuerpo militar o policial jerarquizado, desarrollando en las prácticas la subordinación objetiva hacia el poder civil. Es responsabilidad del poder Ejecutivo con mediación de los Ministros, elaborar los reglamentos en concordancia con principios universalistas de una política orientada al bien común "defensa", o "seguridad pública y ciudadana", y no a los intereses corporativos de las Fuerzas.

* Socióloga. Profesora de la PUCE. Directora Ejecutiva Democracia, Seguridad y Defensa. Correo electrónico: bgarcia@andinanet.net

MILITARES EMPRESARIOS: UN FENÓMENO DE LAS SOCIEDADES EN VÍAS DE DESARROLLO

Kristina Mani*

Desde la mitad del siglo XX, apareció un nuevo fenómeno que ha afectado especialmente a los países en vías de desarrollo: los militares fueron adoptando nuevos roles como propietarios y administradores de emprendimientos económicos. El fenómeno emerge sobre todo durante periodos de construcción del Estado en los países en desarrollo. En algunos casos los recursos económicos son manejados en el nombre de la institución de las Fuerzas Armadas; mientras que en otros, los oficiales de alto o mediano grado encuentran en esta actividad oportunidades para su personal enriquecimiento. Con pocas excepciones, ese tipo de empresariado militar crece, y los ingresos obtenidos constituyen una fuente importante de financiamiento y autonomía institucional con respecto al Estado y a la sociedad.

Algunos ejemplos de soldados en los negocios:

- En Indonesia, los negocios militares han prosperado asociados con intereses en la minería, el petróleo, la industria, y con la protección privada de los intereses de

las empresas multinacionales. Incluyen montos estimados en más de US\$ 10 billones¹.

- Durante los 1990s, el Ejército de Liberación Popular (PLA) en China incorporó a más de 20.000 empresas, que emplearon a varios millones de trabajadores. Para su disolución en 1998 demandaron al Estado compensaciones de US\$ 24 billones².
- Los militares pakistaníes mantienen inversiones por más de US\$5 billones, incluyendo acciones en líneas aéreas y en el banco más importante del país³.
- Oyak, el fondo de pensiones de los militares turcos, opera empresas conjuntas como Oyak-Renault en la industria automotriz, y además en los sectores de la banca, el transporte, los agroquímicos y los recursos

1. "Indonesian Military to Lose Business Empire", Australian Associated Press, Diciembre 9, 2004.

2. James Mulvenon, "Soldiers of Fortune: The Rise and fall of the Chinese Military-Business Complex, 1998-1999", en BICC Paper Num. 15 (Bonn, Germany) Octubre 1999, 8 y 16.

3. Selig S. Harrison, "Why Musharraf Clings to Power", International Herald Tribune, Mayo 10, 2002.

energéticos. Las ganancias de Oyak restan ingresos al Estado pues se realizan con liberación de impuestos⁴.

- En Nigeria, con las políticas de nacionalización en los 1970s, los oficiales accedieron a bienes individuales en sectores como el petrolero, el financiero y el transporte marítimo. También se aseguraron de puestos en el consejo directivo de las empresas multinacionales que operan en el país.
- Durante los 1990s en la guerra civil del Congo, los militares de Nigeria, Rwanda, y Zimbabwe extorsionaron concesiones en las industrias de extracción de piedras preciosas, metales preciosos, y madera a cambio de asistencia militar.
- En El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, los militares mantienen fondos de pensiones y propiedades de corporaciones incluyendo estaciones de radio, hoteles, bancos, compañías de construcción y hospitales.

El fenómeno empresarial militar opera como un verdadero enclave dentro de sociedades en vías de desarrollo y ha sido señalado como altamente significativo por el potencial impacto que puede tener en el deterioro de la propia institución militar, a más de lo que puede ocurrir con sus relaciones con la sociedad civil y la sociedad política.

A pesar de que, por una parte, los enclaves empresariales constituyen una buena base de aprovisionamiento de recursos para los oficiales o para las Fuerzas Armadas, por otra introducen motivaciones extrañas a la vida militar: la motivación por la ganancia y la competencia que afecta a la integridad profesional y a la cohesión institucional de los militares. Más allá, el mantenimiento de tales enclaves de negocios politiza a la institución militar y a sus oficiales, que devienen menos dependientes del Estado y, por consiguiente, menos proclives a rendir cuentas a la sociedad civil y a la sociedad política.

Aunque han aumentado los estudios teóricos y de políticas públicas sobre la privatización de la industrial militar, todavía hay pocos estudios comprensivos sobre la industria en manos de los militares. Pero una investigación sobre las características de las empresas militares permite apreciar tres patrones recurrentes: a) aparecen con mayor frecuencia en países con bajos grados de capacidad institucional del Estado; b) cuanto más alto el nivel de profesionalidad militar, más probable que sus negocios funcionen para el bienestar de la institución militar; cuanto mas bajo el nivel de profesionalidad militar, más se orientarán estos negocios al beneficio personal; c) cuanto más exista la

percepción de aguda amenaza a la nación, más intensas serán las iniciativas económicas de las Fuerzas Armadas.

Estas condiciones pueden explicar, por ejemplo, el ingreso de los militares de China, Ecuador, Pakistán y Turquía; dentro de ellos, únicamente China tenía la capacidad estatal de restringir el estallido de empresas militares que el Estado mismo creó en los 1980s.

Hay varias consecuencias de la creación de empresas militares. Por uno, suele disminuir el profesionalismo de las Fuerzas Armadas. Socava la integridad militar aún en Fuerzas Armadas de origen altamente profesional. Puesto que abren oportunidades para que oficiales individuales puedan adquirir ganancias personales, las empresas militares no mantienen fácilmente su orientación al beneficio o ganancia institucional, ni siquiera cuando los intereses corporativos fueron su propósito original. Eso muestra, por ejemplo, el desarrollo de las empresas militares en Pakistán y China.

Por otro, las empresas militares son bastante resistentes al impacto de la democratización y la apertura del mercado económico. Muchas empresas militares se mantienen debido a la extensa participación que tienen en determinados sectores económicos, a los vínculos existentes que tienen con el Estado o con el sector privado, y a veces a la legitimidad que sigue teniendo frente al público.

En el caso de Ecuador, por ejemplo, figuran incluso todas estas tres condiciones. Es más: parece que lo que más vulnera al enclave militar empresarial es un Estado capaz y fuerte, como mostró el proceso de disolución de empresas de la PLA en China - pero son pocos los Estados tan fuertes que pueden encaminar y también cortar el desarrollo económico-militar.

También un líder altamente resuelto a controlar a los militares puede lograr desmontar el imperio económico-militar, como hizo Menem en Argentina, pero es otro caso de extrema voluntad e intención, en que influyó la deslegitimación social del cuerpo militar.

En el caso de los extensos negocios de las Fuerzas Armadas de Indonesia, aún la voluntad de la clase política y la presión de actores tan poderosos como Estados Unidos no lograron disolver sino únicamente algunos negocios militares de perfil alto. Llama la atención: sin control político de los militares, tampoco hay control de sus emprendimientos o de sus consecuencias.

Las empresas militares hacen que las Fuerzas Armadas sean doblemente poderosas: no solamente ellas manejan el poder coercitivo del Estado, sino que son dueños de los más lucrativos negocios, protegidos de los riesgos del

4. Douglas Frantz, "Military Bestrides Turkey's Path to the European Union", New York Times, Enero 14, 2001; ver también sitio web de Oyak, <http://www.oyak.com.tr/english.asp>.

mercado abierto y sin obligación de rendir cuentas ni al Gobierno ni a la sociedad en su conjunto. Así, donde existe un legado de empresas militares, los civiles en búsqueda de establecer control político sobre la institución se enfrentan con una tarea desalentadora: tienen que mermar una prerrogativa de poder económico y autonomía que no se

vincula lógicamente ni con la democracia ni con el bienestar económico de la sociedad civil.

** Kristina Mani es politóloga; Profesora investigadora del Departamento de Ciencia Política Oberlin College, Oberlin, OH 44074; email: kristina.mani@oberlin.edu.*

¿ES POSIBLE DESARROLLAR LA INTELIGENCIA CRIMINAL EN AMÉRICA LATINA?

José Manuel Ugarte*

La Inteligencia criminal, tema medular de la acción policial

La inteligencia criminal es, en realidad, tan antigua como la actividad policial, cualquiera que sea el nombre que se le asigne (inteligencia o información policial, etc.) No obstante, el auge actual de la inteligencia criminal tiene lugar debido a la creciente percepción de la gente común acerca de que el clásico conocimiento del policía acerca de su barrio o del lugar en el que debe actuar, sobre quiénes son y como actúan los delincuentes de su área, y los registros de antecedentes criminales y policiales en la mayoría de los países, resultan hoy insuficiente ante el auge de la delincuencia, el creciente perfeccionamiento del delito, y, muy especialmente, el auge del delito organizado.

Es necesario, pues recurrir a la inteligencia criminal, que no es sino la aplicación en la actividad policial de la metodología propia de la actividad de inteligencia, fundamentalmente en materia de análisis, para la investigación del delito organizado y complejo en general –inteligencia criminal táctica– y para realizar un análisis sobre la situación en materia delictual de un país, una región o un barrio, las causas que influyen en tal situación y las tendencias y probable evolución a corto, mediano y largo plazo, para orientar la política de seguridad pública –inteligencia criminal estratégica–.

Doctrina y Procedimientos

En muchos países del mundo, sobre todo en los últimos años, existe la tendencia a que la inteligencia criminal se realice conforme a una doctrina, incluyendo normas y procedimientos, que deben ser comunes tanto a un organismo de inteligencia criminal o a un organismo policial con funciones de inteligencia criminal, como a todas las instituciones policiales, fuerzas de seguridad y organismos vinculados a la seguridad pública.

Tal doctrina, se caracteriza por permitir la integración de la tarea de obtención de información y elaboración de inteligencia criminal a todos los niveles del Estado: nacional, provincial o estatal –en el caso de los Estados federales– y

municipal, e incluso zonal y barrial. Ello supone la conformación, dentro de las instituciones policiales, fuerzas de seguridad, y otros órganos vinculados con la seguridad pública –aduanas, órganos de recaudación impositiva, órganos de control migratorio, Bancos Centrales, etc.– de unidades u órganos de inteligencia criminal o bien de cooperación con la tarea de inteligencia criminal.

El avance tecnológico de las comunicaciones, permitirían que estos elementos estén vinculados entre sí, en forma permanente y en tiempo real –con los correspondientes controles que aseguren la privacidad y los derechos individuales de los habitantes–. La doctrina incluye la elaboración de productos de inteligencia estandarizados, que permiten la integración de menor a mayor nivel (local, regional y nacional).

De ese modo el accionar policial pasa a estar guiado por la inteligencia. Un ejemplo interesante es el Modelo Nacional de Inteligencia inglés, cuyas características lo han hecho útil y aplicable tanto para el análisis de toda la gama de actividades criminales, como para la toma de decisiones en materia operativa policial. Se caracteriza, además, por permitir el máximo uso de la tecnología aplicable a la investigación criminal, facilitando su inmediata disponibilidad para un espectro muy amplio de aplicaciones.

Entre las técnicas de análisis empleadas se cuentan análisis de resultados, análisis de redes, evaluación de problemas actuales, análisis de riesgo, análisis del mercado criminal, análisis de blancos (criminales determinados) y análisis de los negocios criminales. A través del perfil de blancos, se procura proveer un panorama detallado de delincuentes potencialmente riesgosos y de sus asociados. Comprende registros personales, registros criminales, perfiles financieros, informe sobre redes o asociaciones delictivas, informe sobre comunicaciones, informe sobre transporte. El registro personal incluye hábitos, estilo de vida, formas de operación, lugares frecuentados, árbol familiar (genealógico inmediato), fotografías, riesgo que representa, capacidades para autoprotegerse, e información relacionada. El registro criminal comprende antecedentes policiales y penales, así como posesión de armas de fuego.

¿Es posible aplicar sistemas de inteligencia criminal en América latina?

Si bien un sistema de inteligencia criminal semejante, ha sido producido y aplicado con éxito en países con una larga trayectoria en el conocimiento científico del mundo criminal, y con instituciones jurídicas eficientes en el ámbito penal como el Reino Unido, las posibilidades de aplicación en nuestros países son importantes si podemos extraer enseñanzas útiles para adecuarlas a nuestra realidad.

- La primera, es tener conciencia de la utilidad de la inteligencia criminal como instrumento para responder al delito organizado, a la creciente complejidad y capacidades técnicas que ha alcanzado, a la globalización y consiguientemente a la mayor capacidad de desplazamiento de delincuentes, capitales, productos del delito, etc., y a la demanda de seguridad por parte de la comunidad.
- La inteligencia criminal debe ser correctamente entendida como parte de la función policial, diferente a la actividad de inteligencia en 'sentido estricto', ya sea nacional (incluyendo a la inteligencia estratégica nacional) o militar. Aunque debe existir cooperación entre ellas, no por ello constituyen la misma función estatal, ni se justifica la dependencia de la segunda respecto de la primera.
- Hay que destacar que la inteligencia criminal no constituye una parte aislada de la función policial, sino, por el contrario, altamente integrada en ésta. Los objetivos de la inteligencia criminal son los objetivos del accionar policial en general, fijados a nivel local por las autoridades de la comunidad, y a nivel nacional, por la autoridad política, (el Ministerio del Interior o su correspondiente).
- Es necesaria una comunicación constante, en tiempo real, entre las unidades de inteligencia criminal de

todos los niveles, en cuanto a acceso a datos y a productos de inteligencia. También es importante que los informes de inteligencia sean estandarizados para permitir el intercambio e integración entre los de menor nivel a los de mayor nivel, de los de espectro más reducido, a los más amplios. Los productos de inteligencia de mayor nivel sirven de base para el establecimiento de prioridades y formulación de requerimientos a nivel nacional. Y estas influyen en las de nivel local, sin perjuicio de contarse a nivel local con las propias prioridades y requerimientos.

El sistema puede ser aplicable a todo tipo de países, tanto unitarios como federales. El Reino Unido es un país unitario, pero existen países de sistema federal de gobierno donde resultados óptimos han sido alcanzados. En Canadá, la existencia del Canadian Criminal Intelligence Service y el fuerte predominio institucional de la Royal Canadian Mounted Police han permitido un desarrollo comparable al británico. Igual ha ocurrido en la República Federal de Alemania, con la Oficina Federal Criminal (Bundeskriminalamt o BKA) y sus similares en los Länder alemanes.

El desafío fundamental para nuestros países, en Latinoamérica, es el de alcanzar la más absoluta profesionalización en la materia, y la máxima transparencia en administración de datos y de fondos, para asegurar que la confianza generada posibilite la adhesión de todas las partes del sistema y de la sociedad. También es necesario el establecimiento de adecuados estándares, reglamentos y normas de control, teniendo en cuenta la protección de la privacidad y de los derechos individuales.

** José Manuel Ugarte es abogado, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Maestría en Seguridad Pública del Instituto Universitario de la Policía Federal, así como de institutos de perfeccionamiento de instituciones de seguridad.*

LAS RELACIONES POLICÍA - COMUNIDAD EN UN CONTEXTO DEMOCRÁTICO

Juan A. Rivadeneira F.*

Las relaciones entre la Policía y la Comunidad en un entorno democrático revisten de una alta importancia. Para la exposición de esta relación se han propuesto tres temas fundamentales: la definición del modelo policial determinado en la sociedad, las directrices esenciales sobre las relaciones en mención y se plantean ciertas reflexiones frente a la coyuntura ecuatoriana.

El profesor argentino, Dr. José Manuel Ugarte, de la Universidad de Buenos Aires y de la Maestría en Seguridad Pública del Instituto Universitario de la Policía Federal de Argentina, en un encuentro realizado en Quito en este año decía: *"Existen, indudablemente, tantos modelos policiales como países en el mundo... Sin embargo, a grandes rasgos, todos derivan de dos grandes troncos que representan una opción fundamental"*⁵ y se refería a la Policía de Estado

5. UGARTE, José Manuel, *Los Modelos Policiales: Policía de Estado y Policía de Comunidad; un debate aún no resuelto*, Boletín Democracia, Seguridad y Defensa, No. 23, p. 2.

y la Policía de Comunidad, la primera se organiza a partir de la estructura estatal y la segunda, que surge del ejercicio de la función policial por parte de los ciudadanos comunes. En la evolución de los dos modelos en el mundo, se ha constatado que sobre todo en caso de la Policía Comunitaria una mayor tendencia a la politización, corrupción y discrecionalidad.

Una de las exigencias en las democracias modernas es la rendición de cuentas por parte de las autoridades a la Comunidad. En el caso de la Policía de Estado, la descentralización de las operaciones policiales ha dado resultado en cuanto a manejo de las distintas competencias. Pero se considera que dicha descentralización, esté sujeta a un sistema de Mando único por los riesgos de que caudillismos locales puedan influir en el sistema, politizándolo o introduciendo elementos de arbitrariedad en la administración de la fuerza. De esta forma será posible, entre otras cosas, un proceso educativo y de capacitación permanente que lleve al empleo de la fuerza policial por el Estado de una manera racional, gradual y en el marco del respeto a los Derechos Humanos.

Vinculado con el tema de la descentralización de los servicios policiales, bajo Mando único, está el de la participación de los gobiernos locales que pueden ser de enorme efectividad brindando las condiciones básicas para una vida comunitaria saludable y ocupándose de centros de rehabilitación, alumbrado público, programas de integración ciudadana. Las Policías Municipales han existido en la historia de nuestro país desde la Colonia con funciones de apoyo a las alcaldías y cabildos. Pero estos cuerpos policiales se distinguen de las Policías de Seguridad porque solo éstas están habilitadas para actuar en la represión y judicialización de los hechos delictivos que deben seguir su curso en el sistema penal.

Las tareas de prevención de la Policía de Seguridad son oportunidades para el relacionamiento directo con autoridades locales y con la comunidad. El policía es un agente que vive en la comunidad y debe estar involucrado en ella. Políticas institucionales como el reclutamiento de los agentes policiales en lugares cercanos pueden ayudar a dotarles de mejores condiciones de vida y evitar problemas como el deterioro de la relación familiar y otros como el alcoholismo, que según un reciente estudio, lo sufre en el

Ecuador cerca del 50% de los policías que realizan labores de vigilancia en provincias distintas a las de su origen. Mecanismos de control como las veedurías ciudadanas sobre la acción de la Policía ayudarán en la construcción de esta cercanía Policía-Comunidad.

Otro punto esencial del mejoramiento de la relación Policía-Comunidad ha sido el incremento de la participación de la mujer⁶ en las tareas policiales. Actualmente participan en la Policía Nacional cerca de 3.000 mujeres frente a aproximadamente 32.700 hombres, lo que corresponde al 8.5%. Pichincha es la provincia que integra un mayor número de mujeres –con cerca de 1.800– y le sigue Guayas de lejos con aproximadamente 330⁷. Esta participación es significativa en tareas de allanamientos, decomisos, detenciones, investigación y seguimiento a las mismas mujeres debido al aumento del índice delincucional femenino y el atroz aprovechamiento de las mismas para el tráfico de drogas. Dicho por un alto jefe antinarcóticos: nos hemos podido dar cuenta de que las mujeres *"son acuciosas y detallistas y superan en resultados a sus compañeros"*⁸, lo cual es un gran aporte para el mejoramiento de la relación con la comunidad, además de su mayor facilidad de comunicación con la gente.

En democracia, la confianza en las instituciones es uno de los pilares más importantes para su efectividad y existencia; en el caso de la Policía no es diferente. Datos obtenidos de la encuesta del INEC⁹ 2005, indican que el 58.3% de los consultados ve poco comprometida a la Policía con la comunidad. El 72.6% de los consultados dijo tener poca o ninguna confianza en la Policía. Esto es preocupante y debe motivar a las autoridades políticas y de la Policía Nacional a renovar los esfuerzos en temas de administración democrática de la fuerza y en derechos humanos, para que exista un acercamiento positivo con la Comunidad.

6. Referencia a la participación de la mujer: REVISTA VANGUARDIA, No. 13, 20 al 26 de diciembre de 2005, Quito, p. 27.

7. *Ibid*, p. 28.

8. *Ibid*, p. 28.

9. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador.

* Investigador del Proyecto Relaciones Civil-Militares, Democracia, Seguridad y Defensa.

MINISTERIO DE GOBIERNO Y NACIONES UNIDAS REALIZAN SEMINARIO DE ALTA GERENCIA POLICIAL

En Quito, en el auditorio de la Comandancia General de Policía, durante toda la semana del 23 al 27 de agosto y con horario completo se realizó el "Seminario de Alta Gerencia

Policial" auspiciado por el Ministerio de Gobierno, con la participación de un selecto grupo de expertos de Naciones Unidas. El Seminario, con nutrida asistencia de miembros

del cuerpo policial en sus diversos grados, se efectuó dentro del proceso impulsado por el Ministro Larrea Benalcázar para la modernización de la Policía Nacional del Ecuador. En este número destacamos algunos puntos del Seminario.

1. Visión crítica del pasado

Se abordaron temas fundamentales mostrando experiencias latinoamericanas y de otros países como parámetros para diseñar las metodologías y mecanismos apropiados para el Ecuador del futuro.

Se destacó en el Seminario la necesidad de proyectar una nueva visión institucional de la Policía para superar los viejos modelos clásicos en América Latina que condujeron a la militarización de las prácticas policiales, a la excesiva jerarquización, y a asumir tareas más allá de sus competencias profesionales. En la región, todo ello llevó a la crisis institucional generalizada que, en gran parte, es causa y efecto a la vez de la debilidad del Estado como aparato administrativo. "El Estado se retiró" —se dijo— de áreas significativas de su actividad, relacionadas especialmente con la política social.

2. Lineamientos profesionales de la acción policial

Para reorientar los procesos de cambio de la Policía Nacional hacia un tipo de organización moderna se requiere distinguir en primer lugar entre lo que constituye una verdadera problemática de seguridad, y lo que es una problemática institucional de la Policía. Por supuesto que los dos ámbitos implican al Estado y a sus autoridades democráticamente electas que deben entender la especificidad de cada uno.

Eso significa que no todos los problemas de seguridad pública tienen que ser abordados por la Policía. Sobre esta problemática tienen responsabilidades otras agencias gubernamentales, entre ellas el sistema penal con el Ministerio Público a la cabeza, la política social del Estado, el sistema carcelario y los gobiernos locales, en tanto pueden aportar con políticas de bienestar social e infraestructura que habiliten los espacios públicos para los ciudadanos.

Es evidente que la Policía no puede actuar por ejemplo sobre las circunstancias estructurales que producen la violencia o la delincuencia en una sociedad. Ni puede ejercer actividades sobre ellas. Pero sí le corresponde asumir tareas específicas que deben estar perfectamente delimitadas por el poder público, y circunscritos en los ordenamientos jurídicos que fundamentan su razón de ser como institución encargada de administrar las tareas de la seguridad pública, el orden público y la seguridad ciudadana, en nombre del Estado.

Marcelo Saín (Director de la Policía Aeroportuaria de Argentina) e instructor del Seminario, sostuvo la necesidad de ir a una "minimización" de la Policía para aumentar su eficiencia y eficacia como institución. Esto quiere decir en el buen sentido que es importante delimitar sus funciones, abandonar las menos específicas a su misión, y poner todo el esfuerzo en aquellas tareas que le corresponden. Lograr de este modo una "Policía minimalista", pero mucho más profesionalizada. Esto implica tener una perspectiva adecuada de la carrera policial. El criterio básico es pensar en qué es lo que puede hacer bien la Policía y qué es lo que no puede.

Conviene tener en cuenta —se dijo al respecto— que muchas de las reformas policiales emprendidas en diversos países, han sido deficientes porque no se centran en estos principios, produciendo una excesiva burocratización lo que no significa necesariamente un grado más alto de profesionalismo.

3. La problemática del delito, eje central de la Policía

Durante el Seminario se recalcó repetidas veces sobre la necesidad urgente de centrar a la Policía frente a la problemática del delito, para prevenirlo, conjurarlo (reprimirlo) y judicializarlo, dentro de una política de seguridad y orden público, marcada por la autoridad política. Esto no significa que la Policía debe estar a las órdenes del gobierno de turno. La Policía es una institución que se debe al Estado, la problemática de la seguridad pública es una tarea estatal organizada en función del bien común representado por sus instituciones.

4. Recomendaciones para una reforma integral de la Policía

- a. Existen problemas serios que afectan a las instituciones policiales latinoamericanas. Entre ellas hay que destacar la excesiva autonomización institucional (virtual tendencia a hacer su propia vida y procurarse sus propias normas, independientemente del sistema democrático); politización; acen tuación de sus papeles de orden, más inclinadas al disciplinamiento social; manipulación de los sistemas de carrera para favorecer "lealtades corporativas"; falta de estructuras normativas y organizacionales eficientes; inexistencia de funcionarios civiles gubernamentales especializados en el tema de seguridad pública; cultura institucional no democrática y no profesional.
- b. Frente a ese diagnóstico, hay que lograr un proceso de cambio que lleve a una nueva estructura organizativa, centrada dentro de una verdadera gestión política del Sistema de Seguridad Pública. Hay que considerar que la Policía es una

parte y no el todo de ese Sistema. Lo crucial de este proceso es contar con la dirección política civil dentro del marco del Estado de Derecho. La carrera policial debe ser estrictamente profesional. Contar con un esquema funcional ágil y bien articulado. Esta articulación debe ser: horizontal, en cuanto a la división de funciones especializadas; y vertical, en una cadena de mando y disciplina, operativamente descentralizada. Las tareas tienen que ser orientada exclusivamente hacia la problemática delictiva, por responsabilidades específicas y resolución de problemas.

- c. Una propuesta es diseñar la estructura organizativa en dos grandes áreas complementarias: una

área estratégica, encargada de la planificación institucional y operativa; y otra, eminentemente operativa, que comprenda a su vez, la distinción funcional de tareas especializadas en "policiamiento complejo" y "policiamiento preventivo" donde la presencia de la Policía en la comunidad no deba ir a la punicidad, sino a la prevención.

En el Seminario se habló de otros temas de alta importancia, tales como los sistemas de información y análisis, educación policial y los diversos niveles de control. El "Boletín DSD" se ocupará de ellos oportunamente.

RESDAL ORGANIZÓ EVENTO EN BOGOTÁ SOBRE "PARLAMENTO Y DEFENSA EN LA REGIÓN ANDINA"

Durante los días 27 y 28 de agosto, en la ciudad de Bogotá, con el grupo de estudios sobre defensa de la Universidad Nacional de Colombia, tuvo lugar el evento: "Parlamento y Defensa en la Región Andina", en el marco del Proyecto "Parlamento y Defensa en América Latina; Conducción política de la Seguridad y la Defensa", patrocinado por RESDAL (Red de Seguridad y Defensa en América Latina) creada en 2001 para la institucionalización de las funciones estatales de seguridad y defensa en el marco de la democracia.

En el evento, inaugurado por Alejo Vargas docente de la UNC y Marcela Donadío, Coordinadora de RESDAL, participaron como ponentes: Loretta Tellería (Observatorio de Democracia y Seguridad, BOLIVIA); Ana María Tamayo (Instituto de Defensa Legal, PERÚ); Bertha García Gallegos (Pontificia Universidad Católica del ECUADOR);

Rocío San Miguel (Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional, VENEZUELA). El Seminario contó también con la participación, como comentaristas, de miembros de las Comisiones de Defensa: Diputado Félix García, BOLIVIA; Senador Jairo Clopatofsky de COLOMBIA; Diputado Luis Vintimilla ECUADOR; el Congresista Rolando Reategui del PERÚ.

Entre los trabajos promovidos por RESDAL se encuentra la elaboración de un Atlas Comparativo de la Seguridad y la Defensa en América Latina, que reúne información básica de la defensa, mediante tablas comparativas y documentos de análisis. Disponible en línea a través de su sitio web (<http://www.resdal.org.ar> / <http://www.resdal.org>).

CRONOLOGÍA DEFENSA, SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA

RESUMEN DE LOS TEMAS SOBRESALIENTES EN JULIO - AGOSTO 2007.

El Observatorio de Relaciones Civil-Militares y Fuerza Pública, Democracia, Seguridad y Defensa, se propone dar seguimiento a los acontecimientos que competen a las instituciones de la Fuerza Pública (Fuerzas Armadas, Policía Nacional) para generar una discusión permanente sobre la adecuada gestión de este sector dentro de los parámetros del Estado de Derecho. En el período julio - agosto de 2007 resaltan seis temas fundamentales.

1.- Debate por ingreso a la Convención del Mar (CONVEMAR)

Congreso Nacional.- La Comisión de Asuntos Internacionales emitió un informe favorable sobre la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR, se concluye con el reconocimiento que el Ecuador tiene "exclusivos derechos de soberanía y jurisdicción en el mar de 200 millas marinas para el aprovechamiento de los recursos existentes, por lo que ha venido luchando desde 1952, desde cuando se aprobó la Convención del Mar". También se mantendrá en plena vigencia la Declaración de

Santiago de 1952, y del Convenio Sobre la Zona Especial Fronteriza Marítima de Lima, de 1954 (EL COMERCIO, Quito, 03/07/07).

2.- Caso Larriva: accidente aéreo en Manta

En este bimestre sucedieron una serie de acontecimientos determinantes entorno al caso de la muerte de Guadalupe Larriva, ex Ministra de Defensa, su hija y cinco militares en enero de este año.

Sanciones.- El Crnl. René Vázquez, recibió diez días de arresto en una unidad militar. La decisión fue tomada por el Consejo Disciplinario de la Fuerza Terrestre y puede ser apelada ante el correspondiente Consejo de Generales de la Fuerza y luego al Consejo de Generales de las FFAA (EL COMERCIO, Quito, 03/07/07). Por su parte el ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Fernando Bustamante, señaló que no se sancionará a ningún militar más, solamente los establecidos por la Junta Evaluadora del Accidente (EL COMERCIO, Quito, 03/08/07).

Participación de la Fiscalía General.- El Fiscal General, Jorge Gérman, fue designado como responsable de la investigación del accidente. El traslado se dio, según el abogado de la familia Larriva, porque hay indicios de responsabilidad por parte del comandante de las FFAA, Héctor Camacho (EL COMERCIO, Quito, 07/07/07).

Presentación de un nuevo video.- El 31 de julio se reunieron en el COSENA, la cúpula militar, la Ministra de Defensa y el Presidente Correa, trascendió que se trató el tema del video publicado en medios de comunicación que refleja el desconocimiento que Larriva tenía de su participación en el vuelo que causó su muerte, en dicho video ella pregunta "¿Adonde vamos?" "¿nos vamos en helicóptero?" De esta forma se presume una contradicción con el primer informe en el cual se afirmaba el desconocimiento de Larriva si abordaría el helicóptero. Ante lo cual Defensa señaló que se trata de un informe ampliado entregado a Correa, y que no corresponde "al vuelo en el que produjo el siniestro" (EL COMERCIO, Quito, 01/08/07), además que no corresponde al día que falleció (DIARIO HOY, Quito, 01/08/07).

Se destaca lo escrito por Carlos Vera cuando señala que con el nuevo video, se comprueban las "mentiras militares", sobre su pedido de volar; además denuncia como el Jefe del Comando Conjunto, pretendió cambiar un documento en el cual se evidenciaba la aceptación al pedido de la Ministra por uno que señalaba una consulta para volar (EL COMERCIO, Quito, 02/08/07).

Ante esto, la ministra Escudero señaló que debe ser Camacho, el que tiene que explicar las razones de lo sucedido (EL COMERCIO, Quito, 17/08/07).

Participación del Congreso Nacional.- La Comisión de Fiscalización pidió a la ministra Escudero, entregar todos los documentos de los informes y los anexos de la Junta Especial de Investigación sobre el accidente (DIARIO HOY, Quito, 04/08/07), esto, luego de aparecido el video que generó la duda del pedido o no de Larriva para subir al helicóptero (DIARIO HOY, Quito, 03/08/07). En comparecencia de Escudero al Congreso, descartó cualquier tipo de sabotaje en el accidente, siendo el motivo una "falla humana debido a la pérdida de la conciencia situacional" de los pilotos y señaló que aunque se está cerrando la investigación, el proceso de sanciones sigue abierto (EL COMERCIO, Quito, 15/08/07).

En el informe enviado a la Fiscalía, piden que se ponga atención en la "negligente y pasiva participación de los militares de alto grado que estuvieron presentes en el momento del embarque", además de acciones penales hacia oficiales del Comando Conjunto y otros. Se pidió explicación de por qué la ministra Escudero, el ministro Bustamante y el Jefe del Com. Conjunto, se presume una conducta que "estaría dirigida a dilatar las investigaciones y a proteger a los militares de alto rango" (EL COMERCIO, Quito, 28/08/07).

Presidencia de la República.- El Presidente señaló el 12 de agosto que en 15 días como máximo tendrán los resultados de las investigaciones. Mostró su inconformidad con las sanciones establecidas "supuestamente siguiendo procedimientos militares", dijo que pidió la baja de algunos de los involucrados, pero "esa orden no se cumplió". (EL COMERCIO, Quito, 12/08/07). El tiempo transcurrió sin ningún resultado (DIARIO HOY, Quito, 28/08/07).

Proceso investigativo.- Se listan algunas anomalías: el hecho de que el tipo de helicópteros como los accidentados (Gazzele) no están permitidos para el transporte de autoridades del Estado; los familiares de las víctimas apelan porque no se impidió que civiles hayan estado en una operación tan delicada. Que el Alto Mando de las FFAA estuvo presente y no intervinieron para detener la actividad, además que "la evaluación no los compromete". Se destaca que la ministra Escudero señaló que la ley no permite sancionar al Alto Mando, cuando el art. 125 del Reglamento de Disciplina Militar señala que las faltas disciplinarias del Jefe del Com. Conjunto serán juzgadas por el Ministro de Defensa (EL COMERCIO, Quito, 27/08/07).

3.- Relaciones Ecuador - Colombia

Informe de la Comisión Científica ecuatoriana.- El reporte señala que "la investigación no se centra solo en el glifosato, sino es una interpretación integral del problema". Para el científico Jaime Breilh, miembro de la Comisión, las aspersiones con los compuestos químicos son "altamente nocivas" para la salud de los moradores. Solo el 32% de las fumigaciones afecta a los cultivos ilegales, 49% penetra en el suelo y 19% se queda en el aire, provocando daños a personas, animales y sembríos permitidos (EL COMERCIO, Quito, 03/07/07).

Demanda de Ecuador en la Corte Internacional de la Haya y fumigaciones.- Los resultados del informe fueron entregados a Colombia a inicios de junio, y se informó que con estos argumentos, Ecuador presentará una demanda ante dicha Corte, para que se suspendan definitivamente las fumigaciones (EL COMERCIO, Quito, 03/07/07). Los miembros de la Comisión y diplomáticos ecuatorianos viajarán el 5 de julio a Colombia, para intercambiar conclusiones con sus pares del país vecino (EXPRESO, Guayaquil, 04/07/07). La demanda fue calificada de "absurda" por parte del Gobierno de Colombia (EXPRESO, Guayaquil, 12/07/07), por lo cual en comunicado de Cancillería se destacó que "al Ecuador le asiste todo el derecho de considerar la apertura de una nueva instancia internacional" (DIARIO HOY, 13/07/07).

Estos hechos llevaron a que a mediados de julio, la canciller Espinosa, declaró que está "agotada" la vía diplomática para llegar a un entendimiento con Bogotá, producto de las discrepancias científicas en las reuniones bilaterales al respecto (EL COMERCIO, Quito, 17/07/07). Por su parte el Canciller colombiano mencionó que el tema debe zanjarse de manera científica, no con la demanda anunciada (EL COMERCIO, Quito, 25/07/07).

Por su parte el gobierno colombiano señaló que impulsará una mayor erradicación de cultivos ilícitos vía manual, y menos fumigaciones con glifosato (EL COMERCIO, Quito, 23/07/07), inclusive el presidente Uribe señaló que "es importante disminuir los recursos de fumigación y aumentar recursos para la erradicación manual". Para el presidente Correa, aunque Colombia detenga de fumigar en la frontera, se continuará con la demanda por los siete años de fumigaciones en la zona (DIARIO HOY, Quito, 23/07/07).

Ante esta crisis, la canciller Espinosa, espera que Colombia se comprometa formalmente por escrito sobre su decisión de suspender definitivamente las

aspersiones aéreas con glifosato (EL COMERCIO, Quito, 24/07/07).

Embajador de Ecuador en Colombia.- Además de esta controversia, se suma la ausencia de Embajador de Ecuador en Bogotá (EL COMERCIO, Quito, 16/07/07). El presidente Correa escogió un diplomático de carrera, se trata de Francisco Suéscum Otatti, actualmente embajador en Venezuela. El nombre fue pedido en reconsideración por la Junta Consultiva, por no cumplir con los requisitos necesarios (EL COMERCIO, Quito, 05/08/07). Luego de 35 días, Colombia no entregaba el beneplácito (EL COMERCIO, Quito, 23/08/07).

Gran desplazamiento de colombianos a Ecuador.- Se trató de uno de los mayores desplazamientos de emigrantes colombianos a San Lorenzo, se conoce que la violencia sería el motivo, particularmente por amenazas de la guerrilla que en el sector habrán enfrentamientos (DIARIO HOY, Quito, 24/08/07), ante esto, el presidente Uribe acusó a las FARC de querer entorpecer las relaciones con Ecuador al ser responsables de la grave situación de migración, se conoce que fueron cerca de 1.700 los desplazados (DIARIO HOY, Quito, 27/08/07).

4.- Relaciones Ecuador - EEUU

Base de Manta.- La Embajadora de EEUU en Ecuador, Linda Jewel, dijo que "estamos muy a gusto en Manta, aún faltan dos años para el culmine el convenio entre EEUU y Ecuador para el uso de un espacio de la Base Aérea". Sobre la existencia de un plan alternativo cuando termine el convenio dijo que eso lo decidirá Washington (EL COMERCIO, Quito, 04/07/07). Por la negativa del Gobierno ecuatoriano de renovar este convenio, un funcionario norteamericano dijo que Colombia ha ofrecido el uso de sus instalaciones aéreas. Pese a esto el funcionario dijo que el Ministerio de Defensa de Ecuador ha indicado que hay espacio todavía para una negociación, una de las opciones es que EEUU use pero no opere la Base, lo cual fue desmentido por el Ministerio de Defensa (EXPRESO, Guayaquil, 13/07/07).

En el FOL (Puesto de Operaciones de Avanzada en Manta) se remiten a entregar las cifras de sus operaciones, el mismo "ha apoyado más de 800 misiones anti-narcóticos, contribuyendo a la interdicción o decomiso de más de 125 toneladas métricas de drogas por un valor de 2.300 millones de dólares". Y en 2006, fueron 850 misiones, que ayudaron a decomisar 258 toneladas métricas de drogas, por 5.200 millones de dólares. Según el Crnl. Eduardo Cárdenas, comandante ecua-

toriano de la Base Aérea Eloy Alfaro, "la FAE no tiene la capacidad para asumir sola la misión de control de narcotráfico si es que se acaba el convenio" (EL COMERCIO, Quito, 29/07/07). Se conoció que por parte de fuentes oficiales de FFAA y de la Diplomacia colombianas, que el nuevo lugar de instalación de la Base militar, sería en Tres Esquinas, ubicada al sur del Caquetá, limítrofe con el Putumayo, una de las zonas más conflictivas en aquel país (EL COMERCIO, Quito, 30/07/07).

Robert Leonard reemplazó a Javier Delucca como jefe del FOL. Leonard se desempeñó en varios cargos militares, como en la coordinación de la OTAN en Europa, Oriente Medio y América Latina (EL COMERCIO, Quito, 17/08/07).

5.- Ministerio de Defensa y Militares

Servicio militar.- La decisión del Tribunal Constitucional de derogar dos artículos de la Ley de Servicio Militar, llevó a un plan para reformar la conscripción. El Ministerio de Defensa propuso que la conscripción sea "subsidiariamente obligatoria", es decir, voluntaria, pero se volverá obligatorio para hombres y mujeres de 18 a 25 años, sino se cubre el cupo de conscriptos que se necesitan (EL COMERCIO, Quito, 04/07/07).

Promociones militares.- En el Consejo Supremo de Generales se decidió que se asciendan a generales de División a los generales de Brigada: Guillermo Vásconez (jefe de la Fuerza Terrestre), Fabián Varela (jefe de Estado Mayor Conjunto de las FFAA) y Ernesto González (director de Operaciones del Comando) (EL COMERCIO, Quito, 07/07/07).

Se posesionó el nuevo Director de Movilización del Comando Conjunto, se trata del Crnl. Geovanny Cadena, el Crnl. Rodrigo Molina fue designado subdirector (EL COMERCIO, Quito, 12/07/07).

Política de Defensa.- La ministra Escudero, sobre la seguridad de la frontera señala que los patrullajes militares son constantes, además del incremento de personal, dice que el plan es reservado y que "en el marco del Plan Ecuador se coordina con la Policía". Plantea que la revisión de la Política de Defensa se la hace desde una perspectiva más amplia, de la seguridad humana, pensada en una coordinación entre civiles y militares (DIARIO HOY, Quito, 16/07/07).

Propuestas de reforma del Gobierno para FFAA.- La ministra Escudero se reunió con los comisionados que redactan el borrador de Constitución para presentar

sus propuestas al respecto. Aseguró que se debe eliminar la calidad de garantes del orden jurídico, que los militares tengan derecho al voto (pero impedidos de: ser candidatos, hacer proselitismo en cuarteles y ser miembros de partidos políticos), que sus empresas solo se dediquen a seguridad y defensa, además que el servicio militar sea comunitario y voluntario (EL COMERCIO, Quito, 19/07/07).

Plan Ecuador.- A tres meses de su inicio no se cuenta con acciones concretas. El Plan se lo ubicó como el tema estrella en la seguridad externa del país. Para el viceministro de Defensa, Miguel Carvajal, "de alguna manera tiene razón: el Plan no arranca plenamente". Se espera el ordenamiento del presupuesto ministerial, seccional y externo (EL COMERCIO, Quito, 20/07/07).

El Gobierno creó una Subsecretaría para ejecutar el Plan, dependiente de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), se busca priorizar las actividades y recursos con las distintas instituciones y organizaciones involucradas (EL COMERCIO, Quito, 22/08/07).

Presidente y FFAA.- El presidente Correa llamó a FFAA a que se preparen para los dos meses venideros, "atentos queridos compañeros de las FFAA. No hay que respaldar a un Gobierno, no hay que respaldar a un Presidente, hay que respaldar a un pueblo que anhela el cambio", dijo Correa en una ceremonia en la Academia de Guerra. Además las calificó de "unas de las pocas reservas morales, patriotas y soberanas que le quedan a este país" (EL COMERCIO, Quito, 04/08/07). Para diario El Comercio, luego del último golpe de Estado, "el pueblo rechazó que sean garantes del orden constitucional y menos aún árbitros o partícipes del proceso. Por tanto, ni sospechas manipuladas ni insólitas alertas" (EL COMERCIO, Quito, 06/08/07), mientras que para Marco Arauz, "los intereses políticos muchas veces derivan en actitudes regresivas y oscurantistas" (EL COMERCIO, Quito, 15/08/07).

Entre los ofrecimientos del Presidente a los militares se destaca: Autoridad Portuaria de Guayaquil y el dragado de la entrada al puerto de la ciudad, según la página web de la Presidencia. Otra oferta es la homologación salarial para las FFAA y el sector público, proceso el cual Correa menciona que terminará en 2009, un año antes de lo previsto. Además se ofreció que militares retirados no aporten al Seguro Social Militar (EL COMERCIO, Quito, 16/08/07). Estas ofertas son calificadas como "una intromisión a la entidad encargada de la seguridad nacional, al delegarle, entre otros temas, la ejecución de proyectos que le podrían enfrentar a actos de corrupción" para la analista militar Bertha

García, y las intenciones son "quererlas instrumentalizar para los programas de Gobierno, colocándoles como un comodín en casi todas las políticas que ejecuta de manera emergente, exigiendo que en sus tareas militares apoye sus políticas" (DIARIO HOY, 17/08/07).

Renuncia de la Ministra de Defensa.- Lorena Escudero presentó su renuncia al cargo, no obstante, se mantendrá en el Gobierno, como Secretaria del Migrante. Una fuente del Ministerio señaló que su salida es producto de fricciones por el caso Larriva, presiones del socialismo y familiares de la fallecida. Se anticipó que el probable sucesor sea Wellington Sandoval, presidente del Consejo Directivo del IESS, otros candidatos son Miguel Carvajal y Fernando Bustamante (EXPRESO, Guayaquil, 31/08/07)

6.- Policía y Seguridad Ciudadana

Plan de Seguridad.- La Policía implementará un plan de seguridad con la participación ciudadana, prevención y reentrenamiento de los gendarmes (mejorar procedimientos policiales, control de delincuencia y convivencia con la comunidad, entre otros puntos) (EL COMERCIO, Quito, 05/07/07). En cuanto a las necesidades para la implementación del plan integral señala el Comandante de la institución: los vehículos para los controles en las carreteras y operativos móviles, 28.000 pistolas, además sistemas de comunicación (EL COMERCIO, Quito, 06/07/07).

Se habló de una declaratoria de emergencia por parte del Presidente, y en un comunicado de la Policía infor-

mó que se hará efectiva "inmediatamente después de que se concluya con la elaboración de un plan especial que aplicará la Policía que será elaborado en coordinación con Ministerio de Gobierno" (EL COMERCIO, Quito, 07/07/07). El Presidente señaló que la institución necesita 300 millones de dólares para emprender un proyecto y cuatro años para combatir el delito. Para los recursos no descartó que se solicite apoyo internacional (EL COMERCIO, Quito, 08/07/07).

Polémica ante convenio con Sea Shepherd.- La ONG Sea Shepherd es una organización ecologista radical, a inicio de julio llegó a un acuerdo sin precedentes con la Policía ecuatoriana, se firmó entre Paul Watson (de la ONG y cofundador de Greenpeace) con el jefe de la Policía, Bolívar Cisneros, en Carondelet, para unirse y combatir la depredación de las especies de las islas. El problema es que se pasó por alto que en el país solo la Marina puede realizar el trabajo de Policía en el mar. El acuerdo no fue conocido ni por la Marina, ni por el Ministerio de Defensa. Se supo que los voluntarios no podrán patrullar en el mar sino solo en tierra (EL COMERCIO, Quito, 20/07/07). El convenio se conoce que prevé una duración de 5 años, siendo la primera etapa en Galápagos y la segunda en la Amazonía (EL COMERCIO, Quito, 26/07/07). Finalmente el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, señaló que el convenio estaba suspendido hasta que se analice la participación de otras instituciones (EL COMERCIO, Quito, 07/08/07).

CON EL AUSPICIO DE:



BOLETÍN DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y DEFENSA

Comité Editorial

Bertha García Gallegos
Fernando Bustamante Ponce
Francisco Rhon Dávila
Juan Pablo Aguilar Andrade

Asesoramiento Internacional

Dr. Louis Goodman - American University (USA)
Dr. Gustavo Suárez Perterra - Real Instituto Elcano
(España)

Investigación

Juan Rivadeneira Frisch

Relaciones Públicas
Inés Cevallos Breilh

BOLETÍN DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y DEFENSA

Toda correspondencia, favor dirigir a:

Av. 12 de Octubre y Patria
Universidad Católica. Torre 2, Piso 9, Oficina 901
Teléfonos:
(593-2) 299 1582
(593-2) 299 1700 ext. 1124

E-mail: bgarcia@puce.edu.ec

Correspondencia y solicitud de ejemplares del boletín:
e-mail: jarivadeneira@puce.edu.ec